

Santiago, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

En los antecedentes RUC N° 1901313201-4, RIT N° 103-2020, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó, se dictó sentencia el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, por la que se condenó a los acusados **Luis Felipe Esquerra Muñoz**, a la pena única de veinte (20) años de presidio mayor en su grado máximo y a las accesorias legales, por la participación que le ha correspondido en calidad de autor del delito de Robo con violencia e intimidación, previsto y sancionado en el artículo 436, inciso primero, del Código Penal, y como coautor del delito de Robo calificado, previsto y sancionado en el artículo 433 N° 3 del Código Penal, en grado de ejecución consumados, los que fueron cometidos en la ciudad de Copiapó el día 5 de diciembre de 2019, a las 00.10 horas y a las 04:15 horas aproximadamente, en forma respectiva, sanción corporal de cumplimiento efectivo; **Gabriel Ignacio Alvarado Barrios** y **Gerson Ignacio Pinto Tello**, a la pena de quince (15) años de presidio mayor en su grado medio y a las accesorias legales, por la participación que les ha cabido como coautores del delito de Robo calificado, previsto y sancionado en el artículo 433 N° 3 del Código Penal, en grado de ejecución consumado, cometido en la ciudad de Copiapó el día 5 de diciembre de 2019 a las 04:15 horas aproximadamente, sanción corporal de cumplimiento efectivo.

Asimismo, fueron absueltos del cargo de ser coautores de los delitos de Robo con violencia e intimidación, previstos y sancionados en el artículo 436 inciso primero del Código Penal, singularizados como hechos N° 1 y N° 3, por los cuales acusó el Ministerio Público, supuestamente cometidos el día 4 diciembre de



2019, aproximadamente a las 23.30 horas y el día 5 de diciembre de 2019, aproximadamente a las 00.30 horas.

En contra del referido fallo las defensas de los sentenciados interpusieron los respectivos recursos de nulidad, siendo estos conocidos en las audiencias públicas de veintiséis de octubre y dos de noviembre último y luego de la vista se citó a la lectura del fallo para el día de hoy, según consta en el acta levantada en su oportunidad.

CONSIDERANDO:

I.- Recurso de nulidad deducido por la defensa de los sentenciados

Gerson Pino Tello y Gabriel Alvarado Barrios.

PRIMERO: Que como causal principal del recurso de nulidad analizado, se hizo valer aquella contemplada en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal en relación a los artículos 342 letra c) y 297 del mismo cuerpo legal.

Indica que la sentencia no se hace cargo de toda la prueba rendida y omite parcialmente lo declarado por testigos, siendo circunstancias trascendentes que podrían fundar una decisión contraria a la adoptada por el tribunal. Además, señala, para alcanzar el grado de convicción legal exigido por el legislador para tener por acreditada la participación de los acusados, los sentenciadores han incurrido en errónea valoración de los medios de prueba rendidos en juicio oral, por cuanto han infringido los principios de la lógica, específicamente el principio de razón suficiente y también las máximas de la experiencia.

Respecto a la omisión parcial de la valoración de la prueba, expone que las declaraciones de Raúl Patricio Zepeda Yáñez y Freddy Sáez Cruces no fueron valoradas en su totalidad, al omitir el contra examen realizado por la defensa que evidencian contradicciones en cuanto al reconocimiento de los imputados al momento de la detención y en las primeras declaraciones vertidas.



Refiere que en cuanto a Raúl Patricio Zepeda Yáñez, en las tres declaraciones que prestó durante la investigación nunca señaló que hubo dos momentos respecto a la comisión de los hechos, la primera en que los individuos que le robaron estaban encapuchados y otro en el que pudo apreciar sus rostros, además que se les exhibieron tres fotografías solamente.

De otro lado, dice, Freddy Sáez Cruces señaló en el contra examen que no tuvo contacto con las víctimas y que por lo tanto no escuchó de ellas la descripción de los autores.

Explica que la sentencia recurrida, omite lo declarado por estos testigos, y las manifiestas contradicciones que se evidencian en cuanto a la información entregada durante el proceso, que dista absolutamente de la vertida en el juicio oral, pues entregan información que nunca fue mencionada en sus múltiples declaraciones durante la etapa investigativa.

Relata que de esta forma se omite el tema de las infracciones al reconocimiento realizado por la víctima en el juicio, que evidentemente es producto de una inducción, simplemente porque no tiene alternativas de optar por otro sujeto al momento de sindicar al autor.

Agrega que el fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal no cumple el estándar de fundamentación o motivación exigido por nuestra legislación, para los efectos de condenar a los acusados, pues la sentencia recurrida equivoca las inferencias a las cuales llega, es decir, no se hace ningún razonamiento claro, lógico y completo de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, atendido que el reconocimiento realizado por la víctima Raúl Zepeda no sería suficiente para acreditar participación de los acusados, toda vez que desde los primeros actos del procedimiento ha sido un testimonio que ha ido proporcionando cada vez mayores antecedentes, asegurando en el juicio oral que



sí había visto los rostros de los imputados, información que nunca fue consignada anteriormente, por lo cual tanto el reconocimiento fotográfico realizado el día 5 de diciembre de 2019, como el efectuado en el juicio oral son fruto de la inducción, por ende no tenían la aptitud suficiente para que el Tribunal adquiriera convicción de la participación de los acusados.

Especifica que se infringió el principio de razón suficiente, pues, como ya se señaló, los sentenciadores omitieron hacerse cargo en la sentencia de lo expuesto por el testigo en el contra examen, específicamente respecto a las versiones entregadas durante la investigación, especialmente al reconocimiento de los acusados, por lo que no resultan razonables las argumentaciones de la sentencia, toda vez que la víctima no ha tenido una versión única y coherente en el transcurso del proceso, en lo que dice relación a la identificación y reconocimiento de los imputados.

Continúa señalando que la inferencia a la que llega el sentenciador al dar credibilidad al relato del testigo Raúl Zepeda y, por tanto, concluir sobre la participación de sus representados en el juicio se agrava, pues dicha conclusión en cuanto a la participación de los acusados se sustenta, según se indica en el considerando vigésimo del fallo, también en el testimonio del testigo Freddy Sáez Cruces, quien fue el funcionario aprehensor, y en su testimonio vertido en el presente juicio oral, particularmente en el contra examen de la defensa, afirma que no le consta que las víctimas hayan entregado en sus testimonios características físicas de los autores del hecho, pues él no participó en esas diligencias. Este testigo solo puede dar cuenta finalmente de la detención de los imputados, del vehículo que se trasladaban y de las especies que llevaban en este último.

Refiere que en el considerando vigésimo cuarto de la sentencia recurrida, el tribunal desestima la declaración del perito Sánchez Correa, sin embargo incurre



en un vicio al valorar positivamente prueba que proviene de esta pericia, como los son las fotografías del set fotográfico N° 31, específicamente las N° 2, 3 y 4, las que fueron exhibidas a los testigos Raúl Zepeda y Freddy Sáez, y como lo consigna el considerando vigésimo del fallo, fueron valorados como medios de prueba para acreditar la participación, toda vez que son las fotografías en que aparecen cada uno de los imputados, y que son reconocidas por los testigos, pues estas fotografías exhibidas tendrían como data el día 29 de noviembre del 2019, seis días antes de la ocurrencia de estos hechos, según lo expresado por el perito mencionado.

Respecto a la infracción del principio de no contradicción, dice que el Tribunal atribuye validez probatoria a las tres fotografías mediante la exhibición a los testigos en juicio, lo que constituye una infracción al mencionado principio, pues este medio de prueba es parte de una pericia de sitio del suceso, incorporada mediante la declaración del perito Eddison Sánchez, que fue desestimada.

Solicita se acoja el recurso, se anule el juicio oral y la sentencia, y determine el estado procesal en que hubiere de quedar el procedimiento, ordenando la remisión de los antecedentes al tribunal no inhabilitado que correspondiere.

SEGUNDO: Que en forma subsidiaria, deduce la causal del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal y la funda en la errónea aplicación del artículo 449 N° 1 del Código Penal, lo que trajo como resultado una incorrecta aplicación del quantum de la pena impuesta.

Si bien, señala, el artículo 449 del Código Penal contempla una facultad para el tribunal en orden a la aplicación de las penas, esta facultad no puede ejercerse de manera desigual o arbitraria, ya que de acuerdo al mismo



razonamiento del tribunal al momento de determinar la pena, le está dando una valoración doble a las lesiones sufridas por la víctima, pues el tipo penal por el que fueron condenados tiene una pena superior a la de un robo con violencia del artículo 436 del mismo cuerpo legal, toda vez que el legislador repudia más fuertemente el resultado lesivo. Si ya este reproche, se ve agravado punitivamente, valorar nuevamente por los sentenciadores la entidad de la lesiones sufridas por la víctima, es una infracción al principio *nen bis in idem*, sin valorar que ambos imputados cuentan con irreprochable conducta anterior, y desestimar el informe pericial social acompañado por la defensa, que da cuenta que ambos jóvenes eran estudiantes de educación superior, con una proyección de futuro, que claramente se ve truncado, con la extensión de la pena aplicada por el tribunal.

Pide se acoja la presente causal, se declare nula la sentencia recurrida y se dicte, sin nueva audiencia pero separadamente, sentencia de reemplazo, resolviendo que la pena que debió ser aplicada, conforme al delito de robo con violencia calificado en grado de desarrollo de consumado, sea la de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio.

II.- Recurso de nulidad deducido por la defensa del acusado Luis Felipe Esquerra Muñoz.

TERCERO: Que como causal principal, deduce la del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, porque a su parecer se infringió el artículo 19 numeral 3 inciso sexto de la Constitución Política de la República, en relación a los artículos 93, 180, 181, 182, 227, 228 y 332 del Código Procesal Penal.

Expresa que el Ministerio Público no dio cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 181 y 93 Código Procesal Penal, que imponen la obligación de registro adecuado y completo de los actos de investigación, afectando el derecho de la



defensa de conocer previamente la información de los testigos que depondrán en juicio, ya que se dejó entrever que los deponentes policías introdujeron en el juicio antecedentes que no se contienen en la carpeta investigativa, lisa y llanamente porque no declararon en sede policial ni en sede fiscal, como acontece con los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile Daniela Constanza Gallardo Varela y Norman Godoy Villarreal, como también el funcionario de Carabineros Mauricio Binimelis Fernández, lo que a priori genera dudas sobre la fiabilidad de las afirmaciones.

Indica que dichas declaraciones no debieron ser valoradas, toda vez que quedó acreditado con sus propios dichos que ellos nunca declararon en la investigación, lo que impidió a la defensa contrastar sus declaraciones previas con las entregadas en el juicio oral. Se impidió ejercer el derecho a controlar su versión porque no pudo pedir la lectura para apoyo de memoria de declaraciones previas para demostrar o superar contradicciones o pedir aclaraciones que no existían, facultad señalada en el artículo 332 del Código Procesal Penal.

Agrega que en definitiva, no se trata sólo de una cuestión relativa al estándar probatorio, sino al cumplimiento de obligaciones legales estrictas, que tienen su razón de ser, en la materialización del derecho al debido proceso. Por ende, resulta lógico que si la defensa del imputado sustenta su impugnación en la inexistencia del registro de tales declaraciones, corresponde que el órgano persecutor que dispone -se supone- del registro de aquellas proceda a su exhibición o incorporación, porque es quien se encuentra en situación de demostrar su existencia, lo que no ocurre durante toda la tramitación de la presente causa.

Solicita anular el juicio y la sentencia recaída en él, excluir los medios de prueba que menciona, y se determine el estado en que el procedimiento debe



quedar, y que el tribunal no inhabilitado que corresponda, provea la realización de un nuevo juicio oral.

CUARTO: Que en forma subsidiaria, interpone la causal del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, al haberse vulnerado, según su parecer, el artículo 19 numeral 3 de la Constitución Política de la República, en relación a los artículos 298, 308, 325, y 329 del Código Procesal Penal; artículo 8.2 letra f) de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14.3 letra e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Relata que durante la realización del juicio oral y previo a la declaración del funcionario policial Norman Godoy Villarreal, éste se entrevista con el fiscal fuera de la sala de audiencias, reconociendo el fiscal en juicio que se acercó a saludar y a indicarle lo que le preguntaría respecto del procedimiento. Explica que conforme a la regla, está prohibido que sean informados los testigos mientras se realice el juicio de lo que ocurre en la sala de audiencias, los testigos deben mantenerse en una sala de espera libre de toda contaminación.

Señala que en el caso sub lite, el perjuicio y la trascendencia de la infracción resultan evidentes, porque es precisamente la declaración del testigo contaminado, el que ha permitió condenar a su representado, tal como se señala en la sentencia recurrida en el considerando décimo cuarto.

Solicita se acoja y se proceda a anular la sentencia definitiva y el juicio oral, y disponga la realización de un nuevo juicio por el tribunal no inhabilitado que corresponda.

QUINTO: Que como segunda causal subsidiaria, invoca la del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación a los artículos 342 letra c) y 297 del mismo cuerpo legal, ya que el tribunal no habría realizado una exposición clara,



lógica y completa de los elementos probatorios aportados por las fuentes de prueba de cargo, pues no indica el contenido de dichos medios de prueba.

Precisa que en el caso *sub lite*, la decisión no expresa en el fallo el contenido de los medios de prueba de cargo. Señala que incurre en esta omisión de tres formas: a) “parafraseando” la información incorporada por los medios de prueba; b) omitiendo la información incorporada por esos medios de prueba de cargo con ocasión del contra examen de la defensa; y c) omitiendo derechamente el contenido completo de ellos.

Respecto del hecho dos el tribunal omite en el fallo el contenido completo de las declaraciones de los testigos Pamela Carmona, la que sólo es mencionada en el considerando 14°; Sergio Cepeda, que se le menciona en el mismo fundamento; Eduardo Ignacio Esbry Molina, que también es nombrado en el basamento aludido; Norman Godoy Villarreal, a quien se le menciona en el considerando duodécimo; Daniela Gallardo Varela, a la que se le nombra en el motivo duodécimo indicado, todos los que prestaron declaraciones extensas.

Arguye que no es suficiente que el tribunal *a quo* indique o consigne el contenido del medio de prueba, debe además señalar las razones por las cuales prefirió o dio preeminencia a determinado medio prueba, sea de cargo o de descargo. Además, si el artículo 309 del Código Procesal Penal permite a las partes dirigir al testigo preguntas para demostrar su falta de credibilidad o algún otro defecto de idoneidad, el tribunal debe hacerse cargo de la información incorporada en ejercicio de esta facultad, de lo contrario, ésta se tornaría vacía, ineficaz para controlar la información que el medio de prueba produce en el juicio.

En este orden de ideas, continúa, la omisión que se viene denunciando no es menor, porque la defensa, con ocasión de los contra exámenes, incorporó información relevante para desacreditar a dos testigos. Por ejemplo, en el caso de



la funcionaria policial Daniela Gallardo, introdujo información tendiente a demostrar que los jóvenes afectados por el hecho 2 han mentido en el juicio oral, sin embargo, el tribunal nada dice al respecto en la sentencia, no indica porqué de todas formas el testigo resultó creíble.

También es ejemplificador el caso del testigo Marcelo González. Este testigo incorporó antecedentes en su declaración que dan por cierto que vio a las personas que los asaltaron, pero la funcionaria policial que toma la declaración da cuenta que este testigo no ve nada porque huye del lugar, así también que no tenían la información del vehículo, ya que solo habla de un vehículo city car rojo. Sin embargo, el sentenciador nuevamente no indica las razones para darle de todas formas credibilidad al testigo y tampoco da razón de la circunstancia que los denunciantes señalan a un tipo con una polera hippie, la que jamás fue encontrada en poder de su representado, ya que al momento de la detención no vestía de esa manera.

Hace presente que el *a quo* no reproduce el contenido de la fuente de la prueba de cargo, limitándose a narrar, mediante las propias palabras del juez redactor, la información incorporada por la prueba en el juicio. De este modo, el tribunal no reproduce con exactitud el contenido del medio de prueba, sino que interpreta, media entre la información introducida por la prueba en el juicio y lo que se reproduce en la sentencia.

Expresa que por ejemplo, en la declaración de la testigo Daniela Gallardo Varela, si se contrasta el parafraseo del tribunal con lo que dijo esta testigo en el juicio, se puede apreciar que el tribunal cambia la información incorporada por el testigo modificando las frases, narrando, por tanto, algo distinto, haciendo parecer más confiable o certera la información, mientras que en el juicio la fuente entregó la información de forma dubitada.



Respecto del hecho cuarto, refiere que el tribunal omite señalar la información incorporada por el medio de prueba de cargo con ocasión del contra examen de la defensa, lo que se demuestra con la declaración de Raúl Zepeda Yáñez, quien mintió en el juicio oral, ya que se acreditó que en tres oportunidades que prestó declaración en la investigación, nunca indica descripciones de las personas que lo asaltan o del vehículo, esta información fue obtenida en el contrainterrogatorio. Sin embargo, esta información es omitida por los sentenciadores y, por tanto, no valorada en el fallo, aun cuando aquella mermó seriamente la credibilidad del testigo.

Pide se acoja esta causal, se declare la nulidad del juicio y la sentencia respecto de los delitos por los cuales fue condenado su representado, debiendo determinarse por el tribunal *ad quem* el estado en que hubiere de quedar el procedimiento y ordenar la remisión de los autos al tribunal no inhabilitado que correspondiere, para que éste disponga la realización de un nuevo juicio oral.

SEXTO: Que los hechos que se han tenido por establecidos por el sentenciador del grado, en el motivo duodécimo y decimoctavo de la sentencia que se impugna, respectivamente, son los siguientes:

1.- *“El día 05/12/2019 aproximadamente a las 00.10 horas, en la vía pública, específicamente en una plaza, ubicada en el sector de calles Avenida Copayapu con Avenida Estadio, en Copiapó, el acusado **LUIS FELIPE ESQUERRA MUÑOZ** junto a otras personas, quienes se movilizaban en el vehículo marca JAC modelo J2, P.P.U HHXT.59-3, descendieron del vehículo, para acto seguido **LUIS FELIPE ESQUERRA MUÑOZ** junto a otra persona acercarse a las víctimas Marcelo González Cortés, Eduardo Ignacio Esbry Molina y Sergio Cepeda Espinoza. El acusado Luis Felipe Esquerra Muñoz intentó entonces quitarle a la víctima Marcelo González Cortés una mochila que portaba*



para sustraerla, no logrando su objetivo en virtud de la resistencia que Sergio Cepeda Espinoza le hizo, razón por la cual intentó asestarle puñaladas a este último. Finalmente la persona que acompañaba al acusado Luis Felipe Esquerra Muñoz forcejeó violentamente con la víctima Eduardo Ignacio Esbry Molina, logrando arrebatarse dos chaquetas, un teléfono celular, documentación personal y dinero, provocándole lesiones consistentes en erosión de más o menos 6 cm en cara izquierda cervical, de carácter clínicamente leve. El acusado Luis Felipe Esquerra Muñoz y su acompañante se dieron a la fuga a bordo del vehículo mencionado con las especies sustraídas en su poder.” (Hecho N° 2 de la acusación fiscal).

2.- “El día 05 de diciembre de 2019 a las 04:15 aproximadamente, en la vía pública, específicamente en el sector de la intersección de calles Circunvalación con Van Buren en Copiapó, los acusados **LUIS FELIPE ESQUERRA MUÑOZ, GABRIEL IGNACIO ALVARADO BARRIOS y GERSON IGNACIO PINTO TELLO**, quienes se movilizaban en el vehículo marca JAC modelo J2, P.P.U HHXT.59-3, descendieron del vehículo se acercaron a la víctima Raúl Patricio Zepeda Yáñez. En ese momento, el acusado **GABRIEL IGNACIO ALVARADO BARRIOS**, le manifestó a la víctima que le entregara sus especies personales mientras los otros dos acusados registraban sus vestimentas. Ante la resistencia de la víctima, ésta fue derribada al suelo y, mientras que se encontraba en el suelo tendida, **LUIS FELIPE ESQUERRA MUÑOZ, GABRIEL IGNACIO ALVARADO BARRIOS y GERSON IGNACIO PINTO TELLO** la agredieron con golpes de pies y puño, provocándole con esta conducta lesiones consistentes en policontusiones y una fractura en la muñeca izquierda calificada como clínicamente grave.

Los acusados **LUIS FELIPE ESQUERRA MUÑOZ, GABRIEL IGNACIO ALVARADO BARRIOS y GERSON IGNACIO PINTO TELLO** finalmente le



sustraieron a la víctima su billetera, llave, tarjetas bancarias, un vaporizador, la gorra que vestía y un reloj, dándose a la fuga a bordo del vehículo mencionado con las especies sustraídas en su poder”. (Hecho N° 4 de la acusación fiscal).

Estos hechos fueron calificados como un delito de Robo con violencia e intimidación, y como un delito de Robo con violencia calificado ocasionando lesiones graves, previsto y sancionado en el inciso primero del artículo 436, y en el artículo 433 N° 3 en relación al artículo 397 N° 2, respectivamente, en relación a los artículos 432 y 439, todos del Código Penal.

SÉPTIMO: Que en cuanto a la causal del artículo 374 letra e), en relación a los artículos 342 letra c) y 297 del Código Procesal Penal, deducida por ambos recurrentes, uno en forma principal y el otro como segunda subsidiaria, se procederá a su análisis conjunto.

La defensa de Pinto Tello y Alvarado Barrios, la hace consistir básicamente en que el Tribunal no se hizo cargo de toda la prueba rendida, errónea valoración de los medios de prueba (al haberse dado credibilidad a los relatos de Raúl Zepeda y Freddy Sáez, pese a sus inconsistencias); por no cumplir con el estándar de fundamentación o motivación exigido por la legislación, en tanto la prueba rendida no sería suficiente para determinar la participación de los acusados; y finalmente por haberse valorado fotografías provenientes de una pericia que fue desestimada por el Tribunal.

De otro lado, el defensor de Esquerria Muñoz, en lo que al primer hecho acreditado se refiere, la sustenta en la omisión del análisis de prueba, ya que el fallo solo hace citas parciales de las declaraciones de los testigos, sin explicar por qué prefiere a un determinado medio de prueba por sobre otro, lo que deja en evidencia la carencia del análisis en cuanto a credibilidad de los testigos se refiere,



extendiendo esta última crítica a los acontecimientos que conforman el segundo hecho que se dio por probado en el fallo.

OCTAVO: Que en lo que atañe a la causal del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, esta Corte ya ha señalado que toda sentencia criminal debe razonar y exponer los fundamentos en que se apoya, justificar la decisión adoptada, fijar los hechos y establecer el derecho aplicable. El cumplimiento de la obligación de motivación de la decisión significa elaborar una justificación específica de la opción consistente en tener algunos hechos como probados, sobre la base de los elementos de prueba obtenidos en la litis, con las garantías inherentes al juicio oral. Tal deber apunta no sólo a permitir la comprensión de la decisión, sino además a garantizar la actuación racional en el terreno de la determinación de las premisas fácticas del fallo.

La satisfacción de esta carga posibilita la fiscalización de la actividad jurisdiccional por los tribunales superiores mediante el ejercicio de los recursos procesales. Si el tribunal explica las razones de su resolución es posible controlar si efectivamente la actividad judicial se ha desarrollado dentro de los parámetros de la lógica-racional y la legalidad o si, por el contrario, es el resultado de la arbitrariedad. Por ello, en nuestro ordenamiento jurídico las decisiones judiciales no deben resultar de meros actos de voluntad o ser fruto de simples impresiones de los jueces, sino que deben ser el corolario de la estimación racional de las probanzas, exteriorizada como una explicación igualmente racional sobre la justificación de la decisión de una determinada manera -y no de otra-, explicación que deberá ser comprensible por cualquier tercero, mediante el uso de la razón.

Así, la salvaguardia esencial del derecho a una sentencia fundada y motivada encuentra consagración en el artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal, que impone a los sentenciadores la obligación de exponer de manera clara,



lógica y completa, cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297 del mismo ordenamiento. Tal disposición establece un sistema de libertad en la valoración de la prueba, el que sólo reconoce como límites los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. De esta manera, el proceso de clausura de un procedimiento legalmente tramitado lo constituye una sentencia que se ciñe a los parámetros citados.

NOVENO: Que se desprende de la simple enunciación de estos preceptos que nuestra legislación procesal penal ha sido especialmente exigente en orden a imponer a los jueces un trabajo de elaboración meticuloso y cuidadoso en la concepción de sus fallos. La preocupación esencial de toda sentencia penal de fijar los hechos y circunstancias que se tuvieran por probadas, favorables o desfavorables al acusado, debe ir precedida de la debida valoración que impone el artículo 297 del cuerpo de leyes ya citado.

Al efecto, esta Corte Suprema ha declarado que el fin de la fundamentación que exige la norma que sustenta el recurso por la causal que se analiza no es otro que permitir la reproducción y fijación del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llega la sentencia, carga que se ve reforzada por lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 36, aplicable en la especie por ser común a todo tipo de resoluciones dictadas en el juicio oral, que declara que la simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los medios de prueba o solicitudes de los intervinientes no sustituirá en caso alguno aquella debida fundamentación, debiendo entonces dar cuenta de lo escuchado en audiencia y, en base a ello, razonar conforme a las normas de la dialéctica a fin de evidenciar las motivaciones



que se han tenido en cuenta para preferir un medio respecto del otro o para darle preeminencia, de modo que de dicho análisis fluya la constancia de cómo hicieron uso de la libertad para apreciar la prueba y llegaron a dar por acreditados los acontecimientos y circunstancias que serán inamovibles posteriormente (SCS N° 3873-2011, entre otras). Lo anterior evidencia, en concepto de Daniela Accatino, la opción de nuestro sistema procesal penal por un modelo analítico de fundamentación del juicio de hecho (“El modelo legal de justificación de los enunciados probatorios en las sentencias penales y su control a través del recurso de nulidad”, en “Formación y Valoración de la Prueba en el Proceso Penal”, Abeledo Perrot, 2010, p.122).

Estas exigencias no están desprovistas del correspondiente respaldo constitucional, ya que el inciso 6° del numeral tercero del artículo 19 de la Constitución Política de la República declara que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado”, por lo que las señaladas normas reglamentan la forma cómo los jueces deben dar por acreditados los hechos y, si no son respetadas, permite la anulación correspondiente.

DÉCIMO: Que, con la finalidad de determinar si efectivamente el fallo incurre en las carencias denunciadas en los presentes arbitrios, resulta necesario acudir a los motivos en que el tribunal establece los hechos relativos a la participación (ya que solo este extremo fáctico es el cuestionado) y valora la prueba a su respecto.

Así, la sentencia en estudio, en cuanto al denominado hecho N° 2 de la acusación fiscal, se refiere a la participación en el considerando decimocuarto, en el que se expone “*Que en cuanto a la participación del acusado **Luis Felipe Esquerro Muñoz**, en calidad de autor del delito de robo con violencia e*



intimidación establecido en esta sentencia, se determinó en primer lugar por los dichos del ofendido **Marcelo González Cortés** quien refiere el día de los hechos estar portando un bolso o mochila la que un sujeto mediante el uso de la fuerza intenta sustraer, a dicho sujeto lo precisa como una persona de un metro setenta aproximadamente, pelo corto, tez blanca, delgado, vistiendo una polera color turquesa, lo que a su vez es coincidente con lo expuesto por **Pamela Carmona**, redunda en lo anterior el reconocimiento de la foto 3 del set N° 31 unido a la imagen N° 11 en las que expone **Marcelo González** que se trata del sujeto que intenta asaltarlo el día 5 de diciembre de 2019 y cuyo fin ilícito es perturbado por la reacción de la víctima Sergio Cepeda. A su vez, esta descripción física del agresor en cuestión es refrendada por **Sergio Cepeda**, quien frustró o evitó el robo en contra de Marcelo González, agregando que el asaltante que se dirige en contra de su amigo, -González Cortés-, a quien pudo ver durante la dinámica violenta e intimidatoria, toda vez, que se pusieron a forcejear agregando que el delincuente en cuestión tenía además de las mismas características mantenía marcas de acné en su cara. **Habiendo dado estas características el ofendido Sergio Cepeda reconoce en estrados a la persona descrita individualizando al acusado Luis Felipe Esquerra Muñoz como la persona que atacó a Marcelo González Cortés, esto es, la misma persona con la que se puso a forcejear y que intentó apuñalarlo, viéndolo en sus palabras no más allá de medio metro.**

Dicho aserto tiene correlato con las descripciones que realizan el resto de las víctimas, y a su vez respaldo en los testimonios policiales de don **Norman Godoy Villarreal y Daniela Gallardo Varela**, quienes refieren básicamente las mismas descripciones físicas del encartado Esquerra Muñoz entregadas por las víctimas el día de los hechos, como asimismo replicando a grandes rasgos la misma dinámica delictiva descrita en estrados por los ofendidos por este delito.



*Resulta contundente los dichos de la policía Gallardo Varela quien estuvo de guardia tanto el día de los hechos, 5 de diciembre de 2019, recibiendo la denuncia de los ofendidos como asimismo, afirmó haber estado de guardia, hace poco tiempo momento recibiendo denuncia por amenazas de parte del acusado Esquerra Muñoz contra Matías Zambrano, quien es el testigo que declara sobre la procedencia del automóvil JAC, tantas veces mencionado, refiriendo la testigo que el acusado amenaza de muerte telefónicamente al testigo mencionado que en caso de acudir a juicio a declarar mataría a su hijo de cinco años, al efecto Gallardo Varela agrega que el denunciante de esta amenaza contaba con un respaldo de esta amenaza. Esto último se relaciona con los intentos que refieren los testigos Meriño y Zambrano de que la madre del acusado Esquerra Muñoz intenta contactarlos para persuadirlos de su intención de declarar en juicio, por cuanto sabría que al relacionar a su hijo, Esquerra Muñoz con el auto JAC, modelo J2, perjudicaría su situación procesal, todo lo cual viene a redundar en la convicción condenatoria, en tanto devela este afán desmedido del acusado de perjudicar ex ante la prueba de cargo, cuestión que en todo caso se supera siempre con los asertos desprovistos de interés alguno de los ofendidos por este delito que nos ocupa, quienes de manera categórica se refirieron de uno u otro modo a Esquerra como el asaltante que el día de los hechos tuvo un forcejeo con Cepeda, a quien intenta agredir con un arma blanca, mientras se anunciaba el ir por armas de fuego para atentar contra las víctimas, por lo que el estándar de convicción condenatoria es suficiente como se ha dicho para relacionar al acusado **Luis Esquerra** con el hecho nominado como número 2, en los términos del artículo 14 N° 1 y 15 N° 1 del Código Penal.*

Que valorando la prueba examinada conforme lo establece el artículo 297 del Código Procesal Penal, ésta ha sido ponderada libremente, adquiriendo estos



sentenciadores la convicción exigida en el artículo 340 del Código Procesal Penal, en cuanto a que se cometió el delito de robo con violencia e intimidación y que le correspondió al acusado **Luis Felipe Esquerra Muñoz** participación a título de autor del mismo. Se analizó la totalidad de la prueba rendida, de la cual los dichos de las víctimas de este hecho resultaron a juicio de estos Juzgadores claros, contestes y categóricos, dando circunstanciada razón de sus dichos, esto es, del lugar, hora y forma en se llevó a cabo el delito, sus circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores; así, sus relatos resultaron del todo verosímiles, sin que se haya vislumbrado por estos magistrados alguna motivación para que fueran mendaces, siendo coincidentes sus declaraciones con la prueba restante de cargo del hecho 2, como son los asertos de los funcionarios policiales, quienes replican lo escuchado por los ofendidos el día de los hechos, versión que en su esencia, esto es, dinámica violenta intimidatoria, sujetos que descienden del individualizado auto rojo, y las descripciones del rol del acusado quien agrede a Sergio Cepeda, se mantiene hasta ser reproducido en juicio oral ante esta sala, pudiendo ver cómo los testigos sindicán de una u otra manera al acusado, desde su relación con el automóvil, cuya prueba gráfica fue contundente, consistente en Set N° 31 fotos N° 5, 6, 7 y 8; set N° 1 fotos 7 y 8 unido al certificado de anotaciones del automóvil permite su individualización formal y los aportes de los testigos dan el soporte material a la procedencia del automóvil. Por su parte la prueba gráfica a la luz del principio de inmediación, y relato de los testigos, permite reforzar la convicción condenatoria del tribunal en cuanto a la participación del encartado Esquerra Muñoz quien figura en las fotos N° 11 de otros medios de prueba y en la imagen N° 3 del Set N° 31.

Abunda como vestigio material del trato hostil y violento del acusado junto a su acompañante de asalto, la erosión cara izquierda cervical de 6 centímetros



aproximadamente, que en palabras del Eduardo Esbry y corroborado por las otras víctimas es producido por el enfrentamiento con los asaltantes del día de los hechos.

A su vez el Set N° 19 fotos 1, 2, y 3 unido a la prueba N° 2° de otros medios de prueba, consistente en una imagen de google maps, y relacionado con los dichos de los testigos mencionados en estos antecedentes, permite tener una idea clara del lugar donde ocurre el asalto, esto es, una plaza en la vía pública entre las avenidas Copayapu y Estadio de esta ciudad.

Así las cosas, la prueba analizada se ha estimado suficiente para tener por demostrado el hecho punible y el grado de participación del encausado en él, arribándose fehacientemente a una decisión condenatoria”.

*De otro lado, la participación en el hecho N° 4 del libelo oficial, la pondera en el motivo vigésimo, en el que se señala “Que, la **participación** en condición de **coautores del artículo 15 N° 1 del Código Penal** por el **delito de robo con violencia calificado** quedó acreditado respecto de los **acusados LUIS ESQUERRA MUÑOZ, GABRIEL ALVARADO BARRIOS y GERSON PINTO TELLO**, siendo establecida con la prueba de cargo, más allá de toda duda razonable, con el mérito y a partir de los testimonios precisos y categóricos sobre todo verosímiles sostenido por los testigos de cargo.*

*En cuanto a lo que se refiere a la participación, el ofendido **Raúl Patricio Zepeda Yáñez** expuso que fue víctima de un asalto el 5 de diciembre de 2019 a las 4:20 de la madrugada aproximadamente en Van Buen con Circunvalación en esta comuna, estaba yendo a su casa después de un trabajo, casi al llegar a Van Buren es interceptado por un auto en que se bajan tres sujetos, un auto rojo JAC, no recuerda patente solo HH, luces en la patente de colores, modelo J2, se bajan tres sujetos, uno con arma blanca que lo intercepta primero, lo amenaza con el*



arma blanca, y luego se baja el resto y lo registran en sus bolsillos, comienzan a forcejar, logra escapar, corre hacia unos pasajes, atrás, los tipos se suben al auto y lo comienzan a seguir, intentaron botarlo con el auto varias veces, tirar al asfalto con el auto, pero no lo lograron, como los pasajes eran estrechos no lo lograron y se bajan de nuevo y uno de ellos alcanza a golpearlo en los pies y botarlo al suelo, en el primer abordaje estaban encapuchados, **pero cuando estaba en el suelo pudo verles el rostro, reconoce al hombre del arma blanca por las expansiones en ambas orejas, a otro con un corte en la ceja de chaqueta roja, el otro de pelo corto con polerón de la universidad de Chile. En el primer evento ve como están vestidos, sus ropas, chaqueta cortaviento roja con blanca la del niño del arma, el resto una chaqueta roja y el otro un polerón de la U de Chile. En el segundo momento cuando estaba en el piso pudo ver los rostros porque no estaban encapuchados, el primero que ve al sujeto del corte en la ceja que presume que lo botó al suelo, y los otros dos los ve cuando están encima de él registrándolo y golpeándolo, recuerda las expansiones metálicas en las orejas, era el que portaba el arma blanca, el otro sujeto tenía rapado el pelo. El primero era el corte en la ceja; segundo expansiones en orejas; tercero era rapado del polerón de la U, rapado lateral; se lleva todas sus pertenencias, un vaporizador, llaves, billetera, menos el teléfono que logró ocultar y logra llamar a carabineros. Por los golpes al levantarse vio una fractura en la muñeca izquierda, lo llevan al hospital y con exámenes se determina fractura radio distal en muñeca izquierda y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y ahora tiene prótesis de titanio en la muñeca, estando en el hospital lo visita una de la madres de los tipos, le dijo, haciéndose pasar por otra persona para evadir la seguridad del hospital y dijo que era madre de uno de los niños, que su hijo era inocente que no había hecho nada, para que**



no declarara en contra de él. Después recibió llamadas de números desconocidos que le pedían hablar con él, rechazó todo porque se arreglaría por medio de la fiscalía. Luego tuvo que estar en rehabilitación producto de su fractura, estaba en periodo de práctica, tuvo que retrasar ese proceso por la hospitalización.

En el juicio oral, la víctima señala que puede reconocer a los sujetos, los vio el día 5 de diciembre, ilustra que el primero de los sujetos, el que está al lado de la defensora vestía con polerón de la U de Chile, el del medio chaqueta corta viento roja con blanca con arma blanca, el último vestía chaqueta roja sin manga con corte en la ceja. La primera persona que indica es de apellido Muñoz porque su madre lo contactó, lo puede reconocer; el del medio por las expansiones y el tercero. El primero lo agrede con golpes de puño y vestía polerón de la universidad de Chile es **FELIPE ESQUERRA**; el segundo de cortaviento rojo con blanco, es el primero que lo aborda, lo agrede con arma blanca y patadas y puños, vestía chaqueta cortaviento blanca con rojo, tenía un banano negro, encapuchado en el primer abordaje; logra ver las expansiones metálicas en la oreja, no estaba encapuchado se trata de **GABRIEL ALVARADO**; la tercera persona lucía chaqueta sin manga color rojo, corte en su ceja, lo agrede con golpes, sustrajo sus especies, vestía chaqueta color rojo sin mangas es **GERSON PINTO TELLO**. Exhibido al testigo el **SET FOTOGRÁFICO N°31**, ofrecido como otro medio de prueba, señala lo siguiente:

Fotografía N°2: señala que es uno de los asaltantes, el tercer muchacho que describe de chaqueta sin mangas.

Fotografía N°3: al primer sujeto que esta abajo con polerón de la Chile.

Fotografía N°4: reconoce el sentado al medio, lo reconoce por expansiones en las orejas.



A su vez, en lo que a participación se refiere, declaró el testigo policial **Freddy Sáez Cruces**, Carabinero, quien expuso que cerca de las 4:30 AM se toma conocimiento de otro robo derivan a cuadrante 4 concurre Cabo Vergara en Van Buren había una víctima lesionada, el funcionario dice que está con la víctima y la traslada de forma urgente a hospital porque le cortaron la mano, pensaron que había mutilado la mano, el día 5 diciembre de 2019, le dice que cierre perímetro desde Luis Flores hasta Diego de Almagro y patrullar lo mayor posible para ubicar el auto, bajan diversos carros de ir acotando los espacios, en esa circunstancias por Circunvalación doblan en Luis Flores, llegan a Los Carreras, bajan en Conrado Araya frente al regimiento, y **el auto tenía un sonido particular por un defecto o tubo de escape**, escuchan un ruido en esas calles, y en eso aparece el auto por O'Higgins en dirección a Conrado Araya, en contra su sentido, ven un auto rojo.

Entre el último comunicado y que ven el auto pasan 5 minutos. Al ver al auto doblar en sentido contrario, ven la patente del auto HHXT59 se prende las balizas, se procede detener el auto y fiscalizar el auto, el chofer baja intenta darse a la fuga, forcejea con él, lo reduce, la radio tiene un botón rojo y se bloquean todos los equipos y pide cooperación y llega la ayuda y detienen a los tres sujetos.

El conductor del auto tenía polerón de la universidad de chile, con la U roja, franjas blancas, **el copiloto vestía casaca cortaviento color rojo franjas negras y blancas**, y un tercero en la parte trasera polerón rojo sin mangas. **Sus rasgos faciales el conductor era tez clara con acné en la cara, pelo castaño, copiloto tez morena expansiones en oreja, pelo dresloc, parte rasera tez morena pelo corto negro**. Luego una vez reducidos toma contacto con fiscal de turno para informar lo sucedido y refiere tener víctimas en el hospital, comisaria y en PDI relacionado el mismo auto con 3-5 individuos, pasan todo a la comisaría



y requiere que los funcionarios que reciben denuncia, las especies que llevaban era un **casco de motocross o algo así, mochila negra o cartera americanino, otras especies más**, se lleva todo a la comisaria, se instruye contacto con las víctimas por los mismos funcionarios para hacer reconocimiento simple. Una vez en la unidad solicita que vaya labocar, en cuanto a reconocimiento, se sacan todas las especies, se ponen en un sillón café y en la medida que llegan las víctimas se le pregunta por las especies incautadas, no participó en nada más, no en el reconocimiento de especies o detenidos, solo puso las cosas en el sillón. En el calabozo el imputado que vestía de polerón de la U le dice a ud., yo lo funo , le dice que cuando trabajaba de civil lo hacía con su papá que era un funcionario de la PDI, le da la chapa de esa persona, y le dice écheme una mano y le digo donde está la bicicleta de una de las víctimas, de una mina que le quitaron la bicicleta, se niega a ello, pero le dice hable con el fiscal para que le baje por la cooperación, se lo comenta al fiscal, y le responde negativamente que lo vea con su defensor y le prohíbe dialogar, esto fue cuando le saca la firma de los derechos **LUIS ESQUERRA MUÑOZ** , que era el que vestía polerón de la Chile.

El testigo reconoce un juicio a los acusados señalando: el primero corresponde al conductor **LUIS ESQUERRA MUÑOZ** al costado de la defensora; la segunda persona es el copiloto **GABRIEL ALVARADO BARRIOS**; el último es **GERSON PINTO TELLO** sentado en la parte trasera.

Exhibido al testigo el SET FOTOGRÁFICO N°31, ofrecido como otro medio de prueba señala lo siguiente:

Fotografía N°2: es el imputado **GERSON PINTO** con el polerón rojo sin mangas, jeans, zapatillas, pelo negro corto.

Fotografía N°3: **LUIS ESQUERRA** polerón de la U de Chile con franjas blancas, short negro, zapatillas.



Fotografía N°4: GABRIEL ALVARADO polerón rojo pantalón plomo gris, zapatillas rojas.

Son los sujetos que iban en el auto rojo mencionado el día 5 diciembre de 2019, los que detuvo en Conrado Araya con Julio Prado, las vestimentas coinciden el imputado **ESQUERRA** vestía de la U de Chile; **ALVARADO** chaqueta roja tipo corta viento, expansión oreja, pelo dreadlock; **PINTO TELLO** iba sentado en la parte trasero. Coincide con el encargo además.

Lo cual es coincidente con el relato del funcionario aprehensor **Hernán Tapia**, este testigo policial señala que cuando hicieron la detención encontraron a Luis Esquerra Muñoz conduciendo el vehículo HHXT59, y de acompañante iba Alvarado y atrás Pinto.

Por ende, en esta parte son todos los elementos de cargo –en lo pertinente– allegados a juicio, permiten establecer con el sólo mérito de la prueba indefectiblemente la vinculación entre el hecho que se ha dado por establecido de robo con violencia calificado y sus agentes **Luis Esquerra Muñoz, Gabriel Alvarado Barrios y Gerson Pinto Tello**.

De lo anteriormente argumentado, no puede sino concluirse de manera lógica, grave, precisa y unívoca, todo lo cual es suficiente para tener por acreditada la participación de los acusados **Luis Esquerra Muñoz, Gabriel Alvarado Barrios y Gerson Pinto Tello** en calidad de coautores de conformidad al artículo 15 N° 1 del Código Penal, del delito que se viene conociendo, lo cual significa el despliegue de las conductas previstas en el tipo penal que nos ocupa, ejecutando directa e inmediatamente la acción típica y sea impidiendo o procurando impedir que se evite, con lo cual se desvirtúa completamente la presunción de inocencia que favorecía a los enjuiciados **Luis Esquerra Muñoz, Gabriel Alvarado Barrios y Gerson Pinto Tello**.



*Si a todo lo anterior, se une la persistencia de los testimonios de la propia víctima y de los testigos policiales, la prueba en que de manera coherente, concreta y sin grandes contradicciones en lo pertinente, narran lo sucedido, se forma convicción absoluta en el Tribunal respecto a la efectividad de sus afirmaciones, esto es, que los encartados **Luis Esquerra Muñoz, Gabriel Alvarado Barrios y Gerson Pinto Tello** son los autores que cometieron el delito de robo con violencia calificado, nada merma la credibilidad de los testigos, y por lo mismo, estos sentenciadores dan pleno valor a sus dichos”.*

UNDÉCIMO: Que en consecuencia, las exigencias de fundamentación cuestionadas, han sido debidamente satisfechas por la sentencia que se revisa. En efecto, el fallo extrae conclusiones del análisis de la prueba, como resultado de un proceso valorativo de cada uno de los elementos de convicción rendidos, tanto respecto de los hechos objetivos integrantes de los tipos penales atribuidos como de la conducta desplegada por los acusados.

En las condiciones expresadas no puede catalogarse como carente de lógica y comprensión el fallo impugnado, como demanda el artículo 342 del Código Procesal Penal, desde que la sentencia entrega los basamentos que conducen a la decisión alcanzada respecto de los delitos pesquisados, fundado en el análisis singular y conjunto de las probanzas producidas, lo cual surge de la lectura de los considerandos del fallo. Tales consideraciones conducen a una conclusión unívoca, como expresa la sentencia, cuya inteligencia se justifica en virtud de los argumentos explicitados en ella y que no han sido desvirtuados por los recursos, por lo que sólo resta concluir que las impugnaciones formuladas por las defensas dan cuenta de una mera discrepancia con la conclusión referida a la forma de atribuir participación a los acusados, juicio que el tribunal sustentó suficientemente como se advierte de los motivos décimo tercero, décimo cuarto,



décimo noveno y vigésimo de la sentencia, por lo que la imputación relativa a una presunta falencia en el razonamiento no será admitida.

DUODÉCIMO: Que además de lo dicho, el mismo fallo en comento, se hace cargo de las alegaciones de las defensas expresamente en el motivo vigésimo tercero, en especial las relativas a la participación y reconocimiento efectuados por las víctimas, en cuanto a las declaraciones de los testigos Pamela Carmona, Sergio Cepeda y Raúl Zepeda, para finalmente abordar el tema de las eventuales inducciones de que fueron objeto tanto víctimas como testigos.

Por lo demás, no se puede soslayar el hecho de que si bien el Ministerio Público acusó por 4 hechos ilícitos, durante el juicio todos ellos resultaron probados, pese a haberse tenido por acreditada la participación de los acusados solo en los denominados hechos N° 2 y 4. De esta forma, los jueces del Tribunal *a quo*, pudieron acceder a los antecedentes incorporados a la audiencia como un todo, más allá que por razones metodológicas y de orden, se haya dividido la imputación. Así las cosas, tal y como fueron presentados los hechos en forma cronológica, en todos ellos, esto es, los ocurridos el día 4 de diciembre de 2019 a las 23:30 horas y el día 5 de diciembre de 2019 a las 00:10 horas, a las 00:30 horas y finalmente a las 04:15 horas, tuvo participación el vehículo marca JAC modelo J2, PPU HHXT.59-3, móvil en el que fueron detenidos los 3 condenados y con las especies sustraídas a la víctima que resultó con las lesiones que calificaron este último delito.

De otro lado, el primero de los impugnantes, pretende presentar el testimonio de Raúl Zepeda Yáñez, como el único elemento de juicio que sirvió para arribar a la determinación de los partícipes del hecho singularizado como N° 4, situación que dista de lo consignado en el fallo en estudio. De esta forma en los considerandos 13° y 14°, se indican todos los elementos de prueba que han



permitido arribar a la convicción condenatoria, pudiéndose mencionar a modo simplemente ejemplar el antecedente que vincula a Esquerra Muñoz con el vehículo en que se movilizaba el día de los hechos y que explica su tenencia. Así también, se puede relevar la circunstancia que la primera denuncia se refería justamente al vehículo, entregándose solo algunas vagas características respecto de sus ocupantes, las que se fueron complementando y precisando, no ya en cuanto a características físicas sino que más bien a las vestimentas de los presuntos agresores.

En rigor, del tenor de los recursos se desprende claramente que lo que se intenta impugnar es la ponderación que hizo el tribunal y en base a la cual fijó los hechos conforme a los cuales calificó la participación de los encartados, así como las razones que llevaron a desestimar las propuestas de las defensas. De esta forma, lo que destaca de los libelos son ciertas contradicciones o insuficiencias que surgirían de un análisis individual de las probanzas; pero esas protestas sobre la apreciación, más propias de un recurso de apelación, carecen de la eficacia legal requerida para configurar la causal de nulidad intentada, lo que conlleva a su rechazo.

DÉCIMO TERCERO: Que, a mayor abundamiento y en cuanto a las alegaciones de los recurrentes, es forzoso recordar que en este recurso no ha sido dada a esta Corte la facultad de realizar una nueva ponderación de los elementos de prueba vertidos en el juicio oral, puesto que ello atenta contra el principio de inmediación y supera los límites de la nulidad. Por el contrario, las argumentaciones de estos impugnantes se dirigen en este sentido, a cuestionar la prueba producida por el Ministerio Público, mediante el análisis parcial de ella, sin atacar —como supone la causal de nulidad en examen— el razonamiento del fallo que plasma el análisis global de la prueba rendida, en cuanto éste debe ajustarse



a las reglas de la sana crítica, respetando las máximas de la experiencia, los principios de la lógica y los conocimientos científicamente afianzados.

Por ello, la circunstancia de no compartir los recurrentes las conclusiones del tribunal en cuanto a la valoración de la prueba producida, no supone automáticamente su impugnación por esta vía, en donde se ha denunciado que contradicen los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, extremo que no concurre pues quedó demostrado que las pruebas fueron consideradas y valoradas, sin contradecir estos parámetros, lo que permite la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegó el veredicto e impide configurar que el vicio denunciado, como constitutivo de invalidación absoluta, que contempla el artículo 374, letra e) del Código Procesal Penal, de manera que, el recurso propuesto por esta causal será rechazado.

DÉCIMO CUARTO: Que, en cuanto a la alegación del primer impugnante de haberse valorado fotografías provenientes de un peritaje desestimado, se debe tener presente que tal como lo indica el recurrente, lo rechazado por el Tribunal como prueba fue justamente la prueba pericial, que consiste en la exposición en juicio del informe respectivo por parte del perito y no la materialidad en que conste el trabajo previo del profesional, salvo las excepciones indicadas en el artículo 315 del Código Procesal Penal, de forma tal que si bien la pericia resultó excluida del razonamiento condenatorio, no ocurrió lo mismo con las fotografías que se contenían en el informe pericial, ya que las mismas fueron ofrecidas como prueba autónoma, según se lee en el mismo fallo, en el motivo séptimo, en el acápite “otros medios de prueba”, N° 31, de manera que su exposición en juicio resultó ajustada a la normativa, y por ende, susceptible de valoración, razón por la cual este extremo de la causal en análisis tampoco puede prosperar.



DÉCIMO QUINTO: Que como causal subsidiaria, la defensa de Pinto Tello y Alvarado Barrios, dedujo la del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, argumentando que se infringió el principio *sic “nen bis in idem”*, al momento de dar aplicación al artículo 449 N° 1 del Código Penal, ya que al determinar la pena, se valoró una circunstancia -lesiones- que ya incluye el tipo penal por el que ya fue condenado, situándola en un nivel superior al que correspondía.

Al respecto cabe tener en consideración que la causal en análisis demanda, como requisito para su admisión, que la errónea aplicación del derecho hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. De esta manera, el recurso que ha sido formalizado se rige por los mismos principios y reglas generales que gobiernan la nulidad procesal, por lo que, para su procedencia, deben concurrir los presupuestos básicos de ésta, entre los cuales se encuentra el llamado “principio de trascendencia” que, por lo demás, recoge el artículo 375 del Código Procesal Penal.

Acorde a lo señalado, este Tribunal no logra visualizar la concreta y determinante repercusión en lo decisorio de lo reclamado, pues incluso sin consideración de los alcances fundados que formula el tribunal al determinar la pena aplicable, las sanciones siempre pudieron ser de la misma entidad que las impuestas, atendido el marco que de ellas determina el artículo 433 N° 3 del Código Penal y la concurrencia de una circunstancia atenuante de responsabilidad penal que asienta a su respecto el considerando 30° de la sentencia, de modo que ninguna trascendencia ha podido tener en el resultado del juicio. En tales condiciones, este capítulo también será desestimado.

Con todo y pese a lo expuesto, ninguna infracción al principio *ne bis in idem* se advierte en la sentencia cuestionada, ya que si bien el juez de instancia tuvo presente, para efectos de determinar en la especie la concurrencia del delito



de Robo calificado del artículo 433 N° 3 del Código Penal, la existencia de las lesiones ocasionadas a la víctima con motivo de la comisión del ilícito de apropiación, en una segunda oportunidad, esta vez ya determinado el marco penal en abstracto y por mandato expreso del artículo 69 del Código de castigos, debe necesariamente considerar, además de la concurrencia de modificatorias de responsabilidad penal, la mayor o menor extensión del mal causado, esta vez como criterio de definición de la pena exacta para el caso concreto, tal y como lo ha hecho el tribunal en su motivo trigésimo.

En este sentido se ha pronunciado el profesor Juan Pablo Mañalich, al señalar *“Pues en la concreción del marco penal, de un lado, y en la individualización de la pena exacta, de otro, se trata de dos operaciones diferenciadas, que se corresponden, sin embargo, con dos pasos de un mismo proceso encaminado a obtener la identificación de la consecuencia punitiva específica a imponer sobre el sujeto a quien resulta definitivamente imputable un hecho punible, en atención a sus concretas particularidades. Por eso, nada extraño hay en que las circunstancias que hacen posible reconocer esas particularidades del hecho punible, en atención a las cuales ha de identificarse la pena que resulta concretamente merecida y necesaria, adquieran relevancia tanto en el nivel de la concreción del marco penal abstracto como en el nivel de la individualización de la pena exacta al interior de ese marco ya concretado”* (Mañalich Raffo, Estudios sobre la fundamentación y la determinación de la pena, pág. 225-226).

DÉCIMO SEXTO: Que, de otro lado, el abogado defensor de Esquerra Muñoz, dedujo como causal principal de su arbitrio, la consignada en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, al haberse vulnerado a su parecer, como se expuso *ut supra*, el deber de registro por parte del Ministerio Público, por no



haberse consignado todas las diligencias de investigación, lo que impidió conocer previamente la información de los testigos que declararon en el juicio oral, impidiendo su contraste, lo que “genera dudas sobre la fiabilidad de las afirmaciones”.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que para la procedencia de la causal de invalidación en examen, la doctrina ha postulado que se requiere también que la infracción posea sustancial influencia en lo dispositivo del fallo, toda vez que este arbitrio supone la exigencia general del agravio, aplicable a todo recurso, y la exigencia general del perjuicio aplicable a toda nulidad. Por ello la contravención debe ocasionar a la parte que la alega, un perjuicio reparable sólo con la declaración de invalidez, lo que existirá cuando la inobservancia de las formas procesales hubiera atentado contra las posibilidades de actuación de ese interviniente en el procedimiento, conforme al artículo 159 del Código Procesal Penal (Horvitz y López, cit., T. II, p. 415; Chahuán S. Manual del Nuevo Procedimiento Penal. Legal Publishing, 6a ed., 2009, p. 353, y Otero M. La Nulidad Procesal Civil, Penal y de Derecho Público. Ed. Jdca. de Chile, 2a ed., 2010, pp. 174-175, estiman derechamente aplicable la exigencia de influencia en lo dispositivo en virtud del artículo 375 del Código Procesal Penal, al recurso de nulidad fundado en la causal en estudio; mientras Mosquera M. y Maturana C. Los Recursos Procesales. Ed. Jdca. de Chile, 2010, p. 330, ratifican que la nulidad sin perjuicio no puede constituir una sanción procesal).

Esta doctrina también ha sido sostenida reiteradamente por esta Corte, al señalar que el recurso de nulidad está regido por los mismos principios y reglas generales que gobiernan la nulidad procesal; por consiguiente, para su procedencia, deben concurrir sus presupuestos básicos, entre los cuales se encuentra el llamado “principio de trascendencia” que, por lo demás, recoge el



artículo 375 del Código Procesal Penal, en virtud del cual la trasgresión que sustente un recurso de esta naturaleza debe constituir un atentado de entidad tal que importe un perjuicio al litigante afectado que se traduzca en un resultado lesivo para sus intereses en la decisión del asunto, desde que exige que el defecto denunciado tenga influencia en la parte resolutive del fallo (SCS Rol N° 12.885-15 de 13 de octubre de 2015 y Rol N° 5363-16 de 3 de marzo de 2016).

Así, se ha resuelto también que el agravio debe ser real, en cuanto perjudique efectivamente los derechos procesales de la parte, esto es, que entrase, limite o elimine su derecho constitucional al debido proceso y, en el caso *sub judice*, el derecho a defensa (SCS Rol N° 2866-2013 de 17 de junio de 2013, Rol N° 4909-2013 de 17 de septiembre de 2013, Rol N° 4554-14 de 10 de abril de 2014, Rol N° 6298-15 de 23 de junio de 2015; Rol N° 5363-16 de 3 de marzo de 2016; Rol N° 76.689-2020, de 25 de agosto de 2020; Rol N° 92.059-2020, de 8 de septiembre de 2020; y, Rol N° 112.392-2020, de 3 de noviembre de 2020).

DÉCIMO OCTAVO: Que en lo concerniente al reproche del deber de registro, de la atenta lectura del recurso no se advierte la forma en que dicha omisión ha afectado concretamente el derecho a defensa del impugnante, ya que solo se limita a realizar una crítica genérica y en abstracto a un potencial ejercicio de contraste con declaraciones previas, más aún cuando las mismas pueden o no existir, y aun habiendo testimonios extrajudiciales, la prueba que el tribunal debe analizar es la rendida en juicio, de manera tal que no satisfaciendo el requisito del “agravio real”, tal motivo no puede ser acogido.

A mayor abundamiento, cabe recordar la comprensión que ha de tenerse del sistema de protección de garantías constitucionales integrante del haz de derechos que conforman el debido proceso, por cuanto una tesis como la postulada en el recurso, que reclama la protección de los derechos de su



defendido, sin asidero en hechos demostradamente lesivos, muta su carácter y lo desnaturaliza, transformándolo en un mero ejercicio retórico, formal, que no vincula la realidad con la norma, lo que como ha dicho esta Corte, no resulta admisible (SCS Rol N° 1.323-2015 de 24 de marzo de 2015).

DÉCIMO NOVENO: Que por último, este recurrente deduce en subsidio, la causal del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, en tanto se habría valorado la declaración del testigo Norman Godoy Villarreal para efectos de lograr la condena de su representado, pese a la contaminación que se habría producido al haber tenido contacto con el fiscal, antes de su declaración.

VIGÉSIMO: Que como ya se expresó, la causal en comento requiere como requisito para su configuración, la trascendencia del vicio reclamado. Ahora bien, para definir la incidencia en el pronunciamiento atacado de la prueba introducida en el juicio oral cuya ilegalidad se sostiene (declaración del testigo Norman Godoy Villarreal), resulta indispensable dilucidar su “virtualidad”, es decir, la cualidad o propiedad para producir el efecto de alterar lo decidido por los jueces de la instancia, ya sea porque al no ser considerada podría haber conducido a la absolución de los imputados, pues sin ella no se habría logrado la convicción más allá de toda duda razonable sobre la perpetración de los hechos imputados o sobre la participación de los encartados en la forma planteada en la acusación o porque pudo haber conducido a una calificación de los hechos de modo diferente, pudiendo quedar subsumidos en una infracción de menor entidad, con incidencia en el castigo.

Si la ilicitud denunciada no ostenta la virtualidad de alterar la decisión impugnada, carece del vicio de trascendencia, lo que obsta anular el juicio y la sentencia que es su consecuencia.



VIGÉSIMO PRIMERO: Que en el marco de las reflexiones antes desarrolladas, resulta evidente que, esta causal del recurso controvierte el ingreso a juicio de un antecedente –testimonio de Norman Godoy Villarreal- que, sumado a otros elementos del proceso, básicamente declaración de los testigos Marcelo González, Pamela Carmona, Sergio Cepeda y Daniela Gallardo, además de las fotografías y prueba documental, permitieron, conjunta y separadamente ponderados, el asentamiento de la sustracción violenta por parte del acusado, situación que priva de sustento a la impugnación, por cuanto el referido elemento de prueba no fue el único, ni menos el principal, que contribuyó a la formación de convicción en un sentido determinado por parte del tribunal.

De aquí que, como ya se expuso, la actuación que se pretende cuestionar, carece de la trascendencia y entidad que es indispensable para admitir la configuración de la causal de nulidad analizada previamente, atendida la existencia de otros elementos de cargo suficientes para formar convicción condenatoria.

En otras palabras, el derecho constitucional al debido proceso del recurrente no fue entrabado, limitado o eliminado de manera sustancial, trascendente o relevante como consecuencia del pretendido vicio, de manera tal que esta causal no puede ser acogida.

Por estas consideraciones y de acuerdo también a lo establecido en los artículos 372, 373 letras a) y b), 374 letra e), 376 y 384 del Código Procesal Penal, **SE RECHAZAN** los recursos de nulidad promovidos por las defensas de los condenados **Luis Felipe Esquerra Muñoz, Gabriel Ignacio Alvarado Barrios y Gerson Ignacio Pinto Tello**, en contra de la sentencia de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno y en contra el juicio oral que le antecedió en el proceso RUC N°



1901313201-4, RIT N° 103-2020, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó, los que en consecuencia, no son nulos.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 36.964-2021.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavorari G. No firman los Ministros Sres. Brito, Valderrama y Dahm, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal, comisión de servicios y con feriado legal, respectivamente.



En Santiago, a veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

